Registro: 2031626

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.3o.C.471 C (10a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Civil	

ARRENDAMIENTO. LA CONSIGNACIÓN DE LLAVES DEL INMUEBLE ARRENDADO EXHIBIDAS MEDIANTE ESCRITO ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL NO LIBERA AL DEMANDADO DEL PAGO DE RENTAS, MANTENIMIENTO, SERVICIOS DE GAS Y AGUA, SI NO ACREDITA HABER IMPULSADO EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE NOTIFICARA AL ARRENDADOR Y SE LE PUSIERA EN POSESIÓN DEL INMUEBLE (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Hechos: En un juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario se demandó, entre otras prestaciones, el pago de rentas no pagadas y de servicios. Ante ello, la demandada contestó la demanda y a su vez formuló reconvención. En la sentencia de primera instancia se condenó a la parte demandada al pago de dichas prestaciones y se absolvió del pago de la pena convencional y de los daños y perjuicios. Asimismo, se declaró improcedente la acción reconvencional. Inconformes ambas partes interpusieron recurso de apelación en el que se modificó la sentencia. Durante la tramitación de este recurso la demandada presentó escrito en el que consignó las llaves y el control de la entrada del inmueble objeto de la litis. En la sentencia de segunda instancia se declaró la terminación del contrato de arrendamiento y se condenó al demandado a la desocupación y entrega del inmueble. Ante ello, la parte actora promovió amparo directo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en las controversias de arrendamiento inmobiliario, la consignación de llaves del inmueble arrendado exhibidas mediante escrito ante el órgano jurisdiccional no libera al demandado del pago de rentas, mantenimiento, servicios de gas y agua, si no acredita haber impulsado el procedimiento a fin de que se notificara al arrendador y se le pusiera en posesión del inmueble.

Justificación: El artículo 2487 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, regula lo referente a la tácita reconducción, lo que significa que si después de terminado el plazo por el que se celebró el arrendamiento, el arrendatario sigue en el uso y goce del bien arrendado, continuará el arrendamiento por tiempo indeterminado, estando obligado el arrendatario a pagar la renta que corresponda por el tiempo que exceda conforme a lo convenido en el contrato; pudiendo cualquiera de las partes solicitar la terminación del mismo en términos del artículo 2478. En ese sentido, si no se celebra previamente un nuevo contrato de arrendamiento por escrito, eso significa que no existe autorización de prórroga. Por ello, es al arrendador a quien le competen las acciones para obtener la desocupación y entrega del bien arrendado, de tal suerte que el arrendatario queda obligado a pagarle las rentas pendientes de pago desde el día siguiente al del vencimiento del plazo estipulado. Sin embargo, la obligación del arrendatario de pagar la renta surge a partir de que recibe la posesión del inmueble y termina en el momento en que la devuelve al arrendador, de conformidad con el artículo 2429 del citado código. En ese orden de ideas, la mera entrega de llaves, exhibidas mediante un escrito, no libera de manera automática al arrendatario del pago de rentas, pues no es posible conocer si el juego de llaves está completo o si corresponde al inmueble arrendado, cuando el arrendador no conoce aún la consignación, de lo

que se infiere que la restitución de la posesión del inmueble no debe quedar al capricho del arrendatario, puesto que será la persona juzgadora quien determine si aprueba o no la consignación después de dar vista al arrendador.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 779/2019. Rebeca Slovik Bialystoski. 21 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: José Francisco Díaz Estúa Avelino.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 1a./J. 106/2012 (10a.), de rubro: "ARRENDAMIENTO. PARA QUE LA ENTREGA DE LAS LLAVES DEL INMUEBLE ARRENDADO AL TRIBUNAL LIBERE AL ARRENDATARIO DEL PAGO DE RENTAS, SE REQUIERE DE LA PREVIA NOTIFICACIÓN DE LA CONSIGNACIÓN AL ARRENDADOR Y QUE EL JUEZ LA APRUEBE.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 1, enero de 2013, página 467, con número de registro digital: 2002456.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031627

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** XVII.1o.P.A.1 A (12a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Administrativa	

ASAMBLEA GENERAL DE EJIDATARIOS. DEBE SOLICITAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL COMISARIADO EJIDAL A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY AGRARIA, PREVIO A ACUDIR AL JUICIO AGRARIO.

Hechos: Las personas integrantes de un comisariado ejidal demandaron ante el Tribunal Unitario Agrario la rendición de cuentas del comisariado en su anterior integración. El tribunal declaró improcedente la acción al considerar que, previo a acudir al juicio, debían agotar el procedimiento establecido en la Ley Agraria, que consiste en que el comisariado ejidal anterior rendirá cuentas a la Asamblea General de Ejidatarios conforme al artículo 33, fracción IV, de la Ley Agraria. Contra esta determinación el comisariado promovió amparo indirecto.

Criterio jurídico: La Asamblea General de Ejidatarios debe solicitar la rendición de cuentas al comisariado ejidal a través del procedimiento establecido en la Ley Agraria, previo a acudir al juicio agrario.

Justificación: De conformidad con los artículos 21, 22, 23, fracciones II, IV y VI, 33, fracciones I y IV y 36, fracciones I y II, de la Ley Agraria, se advierte que es facultad exclusiva de la Asamblea General de Ejidatarios recibir las cuentas de las labores y movimientos de fondos que haya realizado el comisariado. Lo anterior no implica que los ejidatarios queden en estado de indefensión, pues si bien la asamblea tiene la atribución de solicitar informes al comisariado ejidal y al consejo de vigilancia sobre la aplicación de los recursos económicos del núcleo de población, ello no impide que conforme al artículo 24 de la referida ley, pueda ser convocada por el comisariado ejidal o por el consejo de vigilancia, ya sea por iniciativa propia o porque así lo soliciten al menos 20 ejidatarios o el 20 % (veinte por ciento) del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de cinco días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea y se prevea lo conducente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 237/2024. 11 de septiembre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Marta Elena Barrios Solís, Mario Humberto Gámez Roldán y José Raymundo Cornejo Olvera. Ponente: Marta Elena Barrios Solís. Secretaria: Yurivia Miranda Hernández.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031628

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** VI.1o.P.1 P (12a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Penal	

AUDIENCIA DE JUICIO ORAL APERTURADA FORMALMENTE. DIFERIRLA SIN DAR INTERVENCIÓN A LAS PARTES VULNERA LOS PRINCIPIOS DE CONTINUIDAD, CONCENTRACIÓN E INMEDIACIÓN QUE RIGEN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO.

Hechos: Una persona promovió amparo directo contra la sentencia de segunda instancia que confirmó la condena dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento. Durante la tramitación del proceso la audiencia de juicio fue formalmente aperturada y diferida por escrito en diversas ocasiones a petición de las partes procesales, sin abrir debate ni darles intervención en cada diferimiento.

Criterio jurídico: Formalmente aperturada la audiencia de juicio oral no pueden dictarse proveídos para diferirla, pues ello vulnera los principios de continuidad, concentración e inmediación que rigen el proceso penal acusatorio, ya que la suspensión o diferimiento sólo puede decretarse en audiencia, conforme a los supuestos y plazos previstos por la ley adjetiva aplicable.

Justificación: Conforme al artículo 391 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juicio oral inicia cuando el Tribunal de Enjuiciamiento declara formalmente abierta la audiencia de debate. Antes de ese acto, las diligencias son preparatorias y no integran el juicio ni activan el plazo de suspensión, ya que no forman parte del debate oral.

Una vez abierta la audiencia el tribunal únicamente puede decretar suspensiones con base en los supuestos establecidos en la ley y reanudarla a más tardar al undécimo día.

En ese sentido, no puede diferirse por proveído una vez abierta, pues ello equivale a resolver fuera de audiencia sobre un acto que debe decidirse en presencia o con intervención de las partes, lo que vulnera los principios de continuidad, concentración e inmediación del proceso penal acusatorio.

Además, se infringe el artículo 52 del mismo código, que dispone que los actos procesales que deben ser resueltos por el órgano jurisdiccional se deben llevar a cabo mediante audiencias, salvo disposición expresa en contrario, ya que al tratarse de un procedimiento eminentemente oral, el Juez debe decidir a partir de los elementos argumentativos y probatorios aportados por las partes en audiencia.

En consecuencia, los autos de diferimiento dictados sin audiencia, una vez aperturada la audiencia de juicio oral, carecen de validez legal y vulneran los principios rectores del proceso penal acusatorio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Amparo directo 44/2025. 4 de septiembre de 2025. Unanimidad de votos de la Magistrada Alejandra Jarquín Carrasco, así como de Nancy Nayeli Jaramillo Carbajal y Claudia Mendoza González, secretarias en funciones de Magistradas. Ponente: Alejandra Jarquín Carrasco. Secretaria: María de Jesús Mendiola Retana.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031629

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Jurisprudencia	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** PR.A.C.CN. J/5 A (12a.)
Instancia: Plenos Regionales	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Administrativa	

COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL OFICIO DE LA EXTINTA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA (CRE), POR EL CUAL REQUIERE INFORMACIÓN RESPECTO DE UN PERMISO DE EXPENDIO DE PETROLÍFEROS EN ESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al resolver conflictos competenciales derivados de amparos indirectos en los que se reclamó del Jefe de la Unidad de Hidrocarburos de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), el oficio de requerimiento de información respecto de un permiso de expendio de petrolíferos en estación de servicios. Mientras que unos sostuvieron que es competente el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, porque la información requerida está relacionada con facultades de regulación de mercado; los otros consideraron que lo es el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, ya que el oficio señalado no está vinculado con normas, procedimientos o actos para vigilar el cumplimiento de disposiciones en materia de competencia económica.

Criterio jurídico: La competencia por materia para conocer del amparo indirecto contra el referido oficio de la extinta CRE corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Justificación: De la doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal respecto de la competencia por materia para conocer de actos emitidos por los entonces órganos reguladores coordinados en materia energética (como la CRE), quienes contaban con atribuciones legales que inciden en aspectos de competencia económica dentro del sector energético, y del análisis de la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, deriva que el requerimiento se fundamentó en el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética abrogada, el cual obligaba a la entonces CRE a fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector y proteger los intereses de los usuarios. Además, los datos solicitados incluyen indicadores que impactan en el mercado y la libre concurrencia, a saber, balances, flujo de efectivo, volúmenes diferenciados por producto y proveedor, descuentos específicos de Pemex, costos de venta y utilidades, infraestructura y gastos normativos, entre otros.

No se inadvierte que el 31 de octubre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman el párrafo quinto del artículo 25, los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 y el párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de áreas y empresas estratégicas, y que con la publicación de la Ley de la Comisión Nacional de Energía en dicho medio de difusión oficial el 18 de marzo de 2025, la CRE se extinguió. Sin embargo, esa circunstancia no puede analizarse tratándose de una cuestión competencial, la cual debe

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

ceñirse al análisis de la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Máxime que los órganos jurisdiccionales especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones continúan en funciones.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Contradicción de criterios 83/2025. Entre los sustentados por los Tribunales Colegiados Sexto, Décimo Segundo, Décimo Cuarto, Décimo Quinto y Vigésimo Segundo, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, así como el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República. 23 de octubre de 2025. Tres votos de las Magistradas Mónica Saloma Palacios, Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza. Ponente: Mayra Sandoval Mendoza. Secretario: José Miguel Álvarez Muñoz.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 21/2025, el sustentado por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 22/2025, el sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 19/2025, el sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 19/2025, el sustentado por el Vigésimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial 19/2025, y el diverso sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el conflicto competencial 15/2025.

Esta tesis se publicó el viernes 9 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de enero de 2026, para los efectos previstos en el punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031630

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** XVII.1o.P.A.1 K (12a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Común	

CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO. DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS DECLARADOS INHÁBILES POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y POR LA COORDINACIÓN DE JUECES DE DISTRITO Y DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO.

Hechos: En amparo indirecto se impugnó la determinación de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua de revocar la resolución recurrida y decretar auto de no vinculación a proceso. El Juzgado de Distrito desechó de plano la demanda por extemporánea, pues aunque existía circular del entonces Consejo de la Judicatura Federal que suspendía plazos de los asuntos que no fueron considerados como urgentes, como el asunto entraba en el supuesto de actuaciones en el periodo de preinstrucción encuadraba en los actos considerados como urgentes.

Criterio jurídico: En el cómputo del plazo para promover amparo indirecto deben descontarse los días inhábiles previstos en el artículo 19 de la Ley de Amparo, así como los declarados inhábiles por el Órgano de Administración Judicial y por la Coordinación de Jueces de Distrito y de Magistrados de Circuito.

Justificación: A fin de privilegiar el derecho humano a la tutela judicial efectiva y proporcionar certeza jurídica a las personas justiciables, para efectos del cómputo del plazo para presentar la demanda de amparo indirecto no pueden tomarse en cuenta los días en los que la autoridad jurisdiccional no labore, aun cuando lo haga a puerta cerrada. Lo contrario demeritaría las formalidades esenciales del procedimiento, el derecho de acceso a la justicia y el principio de certeza jurídica, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 330/2024. 19 de septiembre de 2025. Unanimidad de votos de los Magistrados Mario Humberto Gámez Roldán y José Raymundo Cornejo Olvera, y de la Magistrada Marta Elena Barrios Solís. Ponente: Mario Humberto Gámez Roldán. Secretaria: Cinthya Alejandra Ramírez González.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031631

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.3o.C.473 C (10a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Civil	

CONTROVERSIAS DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. CUANDO SE DECLARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO ES IMPROCEDENTE LA DEVOLUCIÓN DEL DEPÓSITO CUANDO EXISTAN OBLIGACIONES PENDIENTES A CARGO DEL ARRENDATARIO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Hechos: En un juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario se demandó, entre otras prestaciones, el pago de rentas no pagadas y de servicios. Ante ello, la demandada contestó la demanda y a su vez formuló reconvención. En la sentencia de primera instancia se condenó a la parte demandada al pago de dichas prestaciones y se absolvió del pago de la pena convencional y de los daños y perjuicios. Asimismo, se declaró improcedente la acción reconvencional. Inconformes ambas partes interpusieron recurso de apelación en el que se modificó la sentencia. Durante la tramitación de este recurso la demandada presentó escrito en el que consignó las llaves y el control de la entrada del inmueble objeto de la litis. En la sentencia de segunda instancia se declaró la terminación del contrato de arrendamiento y se condenó al demandado a la desocupación y entrega del inmueble. Ante ello, la parte actora promovió amparo directo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando se declara la terminación de un contrato de arrendamiento inmobiliario es improcedente la devolución del depósito cuando existan obligaciones pendientes a cargo del arrendatario.

Justificación: De los artículos 2185, 2188 y 2190 del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, se desprende que la compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente. Para que haya lugar a ésta, se requiere que las deudas sean igualmente líquidas cuyo pago no puede rehusarse conforme a derecho. En ese orden de ideas, al declararse la terminación del contrato de arrendamiento es improcedente la devolución del depósito cuando aparezcan obligaciones pendientes a cargo del arrendatario, de tal suerte que no procede la extinción de sus compromisos a través de la compensación, de conformidad con el citado artículo 2185, máxime si el arrendador y el arrendatario carecen de la calidad de deudores y acreedores recíprocos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 779/2019. Rebeca Slovik Bialystoski. 21 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: José Francisco Díaz Estúa Avelino.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031632

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.3o.C.472 C (10a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Civil	

DAÑOS Y PERJUCIOS EN CONTROVERSIAS DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. SE ACREDITAN CON EL CONTENIDO DE LA DILIGENCIA ACTUARIAL Y SU REPARACIÓN DEBE REALIZARSE MEDIANTE EL DEPÓSITO, CUYA CUANTIFICACIÓN PODRÁ REALIZARSE EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Hechos: En un juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario se demandó, entre otras prestaciones, el pago de rentas no pagadas y de servicios. Ante ello, la demandada contestó la demanda y a su vez formuló reconvención. En la sentencia de primera instancia se condenó a la parte demandada al pago de dichas prestaciones y se absolvió del pago de la pena convencional y de los daños y perjuicios. Asimismo, se declaró improcedente la acción reconvencional. Inconformes ambas partes interpusieron recurso de apelación en el que se modificó la sentencia. Durante la tramitación de este recurso la demandada presentó escrito en el que consignó las llaves y el control de la entrada del inmueble objeto de la litis. En la sentencia de segunda instancia se declaró la terminación del contrato de arrendamiento y se condenó al demandado a la desocupación y entrega del inmueble. Ante ello, la parte actora promovió amparo directo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para acreditar los daños y perjuicios sufridos en un inmueble arrendado, es suficiente que se demuestren a través del contenido de una diligencia actuarial, para que el arrendatario deba repararlos, por lo que de existir un depósito deberá aplicarse directamente a los menoscabos ocasionados, cuya cuantificación podrá realizarse en ejecución de sentencia.

Justificación: En términos del artículo 285 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, tratándose de juicios de arrendamiento inmobiliario, únicamente tiene que probarse que se sufrieron los daños y por lo que respecta a su cuantificación, reparaciones o mejoras, detalles y precisiones, éstas podrán realizarse en ejecución de sentencia. Así, de acreditarse los daños y perjuicios sufridos en un inmueble a través del contenido de una diligencia actuarial, de la que se desprendan las condiciones en que se encuentra al momento de la devolución, no es necesario detallar los daños sufridos, dado que aparecen en el acta levantada por el actuario judicial, pues basta que el fedatario se percate a través de sus sentidos de los daños que advierta y se encuentran reflejados en el acta respectiva. En ese sentido basta para tener por acreditados los daños y perjuicios a través de la razón actuarial, para que el arrendatario deba repararlos, por lo que, de existir un depósito, éste deberá aplicarse directamente a los menoscabos ocasionados. Y si el arrendatario se obligó a que al momento en que desocupara el bien arrendado, lo devolvería en el mismo estado en que se recibió, que se presume en condiciones de uso normal, es inconcuso que la cantidad entregada por concepto de depósito debe aplicarse, entre otras cosas, para la reparación o sustitución de muebles y enseres, o en caso de daños o pérdidas, en ese tenor, deberá aplicarse en primer lugar a la reparación de los daños ocasionados y devolver en su caso el remanente, lo que podrá realizarse en todo caso en ejecución de sentencia a través de la prueba pericial respectiva.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 779/2019. Rebeca Slovik Bialystoski. 21 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: José Francisco Díaz Estúa Avelino.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031633

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Jurisprudencia	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** PR.A.C.CS. J/2 K (12a.)
Instancia: Plenos Regionales	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Común	

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SU PRESENTACIÓN EN EL BUZÓN JUDICIAL DE LAS OFICINAS DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y NO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, NO INTERRUMPE EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN (ARTÍCULO 176, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO).

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si la presentación de la demanda de amparo directo a través del buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito interrumpe el plazo para su promoción. Mientras que uno consideró que dicha presentación no lo interrumpe; el otro consideró que la demanda debía estimarse oportuna pues había sido depositada dentro del plazo legal, y la remisión a la autoridad responsable se vio demorada por parte de los empleados de la oficina referida.

Criterio jurídico: No se interrumpe el plazo para promover el amparo directo cuando la demanda se presenta en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito, en lugar de hacerlo ante la autoridad responsable.

Justificación: Conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis aislada y jurisprudenciales 2a. I/2018 (10a.), 1a./J. 1/2021 (11a.) y 2a./J. 28/2018 (10a.), así como por el artículo 176 de la Ley de Amparo se deduce una regla absoluta: la demanda de amparo directo debe presentarse ante la autoridad responsable, sin que la presentación ante un órgano distinto interrumpa el plazo para su promoción. Esta consecuencia deriva de que la carga mínima de dirigir correctamente la demanda corresponde estrictamente a la persona justiciable, quien debe presentarla ante la autoridad que emitió la resolución reclamada, sin que se actualice una excepción cuando se deposita en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito.

En ese sentido, se advierten dos razones para considerar que el depósito de la demanda de amparo directo ante el buzón judicial no puede constituir una excepción a la regla del artículo mencionado: 1) la presentación de la demanda de amparo directo ante la autoridad responsable constituye un presupuesto básico procedimental para la determinación de la oportunidad que responde a las exigencias de una correcta y eficiente administración de justicia, pues debe tenerse en cuenta que los artículos 176 a 178 de la Ley de Amparo encomiendan una serie de deberes procesales a efecto de lograr la remisión del expediente de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito que las oficinas de correspondencia común no pueden suplir; por tanto, esas actuaciones procesales se ven entorpecidas o inhibidas por el depósito erróneo, en demérito de la pronta administración de justicia; y 2) por seguridad jurídica, ya que puede decirse que la intención del aludido artículo 176 es evitar que las demandas de amparo puedan interponerse ante cualquier autoridad, revirtiendo en ésta la obligación de remitir los escritos de amparo a las autoridades responsables o a las que así sean consideradas.

En consecuencia, la regla contenida en dicho artículo constituye un presupuesto básico que responde a las exigencias de una correcta y eficiente administración de justicia, así como a razones de seguridad jurídica para todas las partes.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Contradicción de criterios 72/2025. Entre los sustentados por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 29 de octubre de 2025. Tres votos de las personas Magistradas Mariana Flores Vega, Diana Elda Pérez Medina y Jorge Alberto Orantes López. Ponente: Mariana Flores Vega. Secretario: Moisés Israel Flores Pacheco.

Tesis y/o criterios contendientes:

El sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 155/2020, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, al resolver el recurso de reclamación 36/2024.

Nota: Las tesis aislada y jurisprudenciales 2a. I/2018 (10a.), 2a./J. 28/2018 (10a.) y 1a./J. 1/2021 (11a.) citadas, aparecen publicadas con los rubros: “DEMANDA DE AMPARO DIRECTO PRESENTADA ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE. EL ARTÍCULO 176, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, AL SEÑALAR QUE ELLO NO INTERRUMPE LOS PLAZOS QUE PARA SU PROMOCIÓN ESTABLECE LA LEY, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.”, “DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SU PRESENTACIÓN EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NO INTERRUMPE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, DEBIENDO CONSIDERARSE PARA EL CÓMPUTO DE SU PROMOCIÓN, LA FECHA EN QUE SE RECIBE ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.” y “AMPARO DIRECTO. SI LA DEMANDA RESULTÓ EXTEMPORÁNEA AL HABERSE PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA RESPONSABLE CONFORME A LA REGLA DEL ARTÍCULO 176, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE EXAMINARSE EL FONDO DE LA LITIS BAJO LA CONSIDERACIÓN DE QUE EN EL JUICIO ESTÁN INVOLUCRADOS DERECHOS DE MENORES DE EDAD.”, en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 19 de enero de 2018 a las 10:20 horas, 13 de abril de 2018 a las 10:17 horas y 2 de julio de 2021 a las 10:09 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 50, Tomo I, enero de 2018, página 531, Libro 53, Tomo I, abril de 2018, página 590, y Undécima Época, Libro 3, Tomo II, julio de 2021, página 1604, con números de registro digital: 2016008, 2016589 y 2023315, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 9 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de enero de 2026, para los efectos previstos en el punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031634

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** PR.A.C.CN.1 K (12a.)
Instancia: Plenos Regionales	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Común	

DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS ANTE LOS PLENOS REGIONALES. ES IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN CUANDO EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DENUNCIANTE PERTENECE A UNA REGIÓN DISTINTA DE AQUELLA EN LA QUE SE EMITIERON LOS CRITERIOS DENUNCIADOS.

Hechos: Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, recibió por razón competencial una denuncia de contradicción de criterios remitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual los Magistrados denunciantes se encuentran adscritos a un Tribunal Colegiado de Circuito perteneciente a la Región Centro-Sur.

Criterio jurídico: Es improcedente la denuncia de contradicción de criterios por falta de legitimación, cuando los denunciantes son personas juzgadoras adscritas a órganos jurisdiccionales Federales pertenecientes a una diversa Región de aquella en la que se emitieron los criterios controvertidos.

Justificación: Conforme a los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225 al 227 de la Ley de Amparo, la legitimación para denunciar contradicciones de criterios ante los Plenos Regionales está conferida a las personas titulares de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito que pertenezcan a la Región en la cual se emitieron los criterios denunciados.

Del análisis histórico y sistemático de las reformas constitucionales que han regulado la contradicción de tesis, ahora contradicción de criterios (de los años 1951, 1967, 1994, 2011, 2021 y 2024), en relación con la creación de los Plenos de Circuito y, posteriormente de los Plenos Regionales, se advierte el objetivo de garantizar la unificación de criterios jurisdiccionales dentro de cada uno de los Circuitos Judiciales y, por igualdad de razón, al interior de cada Región, evitando la intervención de órganos ajenos a su ámbito de competencia territorial.

La extinta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 122/2024 (11a.), sostuvo que el envío de una denuncia a los Plenos Regionales por parte de ese Alto Tribunal por una cuestión competencial, no convalida la legitimación del promovente en las contradicciones de criterios que serán sujetas a su conocimiento, pues ese presupuesto procesal les corresponde verificarlo a dichos Plenos Regionales atendiendo a los casos que efectivamente les fueron remitidos.

La fracción III del artículo 227 se encuentra vinculada a la fracción III del diverso artículo 226, ambos de la Ley de Amparo, pues aquélla remite a ésta en lo que respecta a la mención de los Tribunales Colegiados y sus integrantes como sujetos legitimados para formular la denuncia de contradicción, de manera que conforme a una interpretación armónica, sistemática y funcional de dicha regulación, se concluye que la expresión normativa "los mencionados tribunales y sus integrantes" expresamente refiere a los Tribunales Colegiados de la Región correspondiente y sus integrantes, esto es, de

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

la Región en la que se suscita la contradicción de criterios, interpretación que también resulta aplicable para el caso de los Jueces de Distrito.

Estimar lo contrario implicaría otorgar legitimación para formular denuncias de contradicción de criterios a Magistrados de Circuito (así como eventualmente a Magistrados de Apelación y Jueces de Distrito) de una Región distinta a aquella en la cual se emitieron los criterios denunciados, lo que pugna con la finalidad de otorgar certeza jurídica con la emisión de criterios jurisdiccionales homogéneos, pues aun en el hipotético caso de que la contradicción resultara procedente y se emitiera un criterio jurídico sobre el tema de fondo, éste no resultaría obligatorio para el órgano denunciante, quien podría incluso inobservarlo, en detrimento del principio de seguridad jurídica.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Contradicción de criterios 204/2024. Entre los sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en auxilio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 16 de octubre de 2025. Tres votos de las Magistradas Mónica Saloma Palacios, Virginia Pétriz Herrera y Mayra Sandoval Mendoza. Ponente: Virginia Pétriz Herrera. Secretario: Alejandro Lucero de la Rosa.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 122/2024 (11a.) citada, aparece publicada con el rubro: "DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS REMITIDA POR RAZÓN COMPETENCIAL. LOS PLENOS REGIONALES PUEDEN DECLARARLA IMPROCEDENTE POR FALTA DE LEGITIMACIÓN SI EL DENUNCIANTE NO FUE PARTE EN ALGUNO DE LOS ASUNTOS RECIBIDOS.", en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de septiembre de 2024 a las 10:29 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 41, septiembre de 2024, Tomo III, Volumen 1, página 1121, con número de registro digital: 2029383.

Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031635

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** XVII.1o.P.A.14 K (11a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Común	

DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD. LOS PROTOCOLOS PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE INFANCIA Y DE DISCAPACIDAD, EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CONSTITUYEN HERRAMIENTAS DE INTERPRETACIÓN JUDICIAL PARA LOGRAR LA VIGENCIA DE SUS DERECHOS.

Hechos: Una madre, en representación de su hijo menor de edad, impugnó en amparo indirecto la omisión de un centro de educación especializado que ofrece atención integral a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, discapacidad múltiple o trastornos graves del desarrollo, de proporcionarle una educación pública inclusiva. Manifestó que padece una condición de discapacidad severa y permanente para realizar actividades de la vida cotidiana, por lo que existe el riesgo de que se impida su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de las personas. En su informe justificado la autoridad responsable negó la existencia de los actos reclamados y solicitó que se sobreseyera el juicio. El Juzgado de Distrito concedió el amparo. En su contra se interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los Protocolos para Juzgar con Perspectiva de Infancia y de Discapacidad emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen herramientas de interpretación judicial para lograr la vigencia de los derechos de personas en situaciones especiales de vulnerabilidad, mediante la aplicación de medidas de protección reforzada.

Justificación: El derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad debe garantizarse a través de una protección reforzada, que reconozca y combata las barreras estructurales, institucionales y sociales que históricamente les han excluido o limitado en el ejercicio efectivo de sus derechos. Esta obligación no se agota al asegurar el acceso físico a la educación, sino que comprende el deber de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, en igualdad de condiciones con las demás personas, mediante ajustes razonables, apoyos específicos y entornos accesibles.

Lo anterior de conformidad con el marco normativo aplicable establecido en los artículos 1o., 3o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bajo este marco, los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de aplicar una protección reforzada al conocer de posibles afectaciones al derecho a la educación de este grupo de personas.

En este contexto, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Discapacidad, emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen herramientas de aplicación mínima para las personas juzgadoras, en tanto desarrollan directrices interpretativas basadas en los principios constitucionales y convencionales referidos. Su observancia resulta indispensable para asegurar que las decisiones judiciales garanticen el

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

interés superior de la niñez y el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, evitando reproducir estereotipos o decisiones formalistas que perpetúen la desigualdad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 1424/2024. 19 de junio de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretario: David Pallares Higuera.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031636

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** XVII.1o.P.A.13 K (11a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Común	

DERECHO A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. NO DEBE SOBRESEERSE EL JUICIO DE AMPARO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, YA QUE SU ANÁLISIS EXIGE UNA DECISIÓN DE FONDO CON PERSPECTIVA DE INFANCIA Y LA APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS PRO PERSONA Y DEL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ.

Hechos: Una persona impugnó en amparo indirecto diversos actos derivados de una educación inclusiva incompleta por parte de un centro de educación especializado que ofrece atención integral a niñas, niños y adolescentes con discapacidad, discapacidad múltiple o trastornos graves del desarrollo. Mediante informe justificado la autoridad responsable negó la existencia de los actos reclamados y solicitó que se sobreseyera el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. El Juzgado de Distrito concedió el amparo. En su contra se interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que tratándose de una controversia que involucre el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, cuando la autoridad responsable niegue la existencia de los actos reclamados al rendir su informe justificado, la autoridad judicial no debe decretar el sobreseimiento sin realizar un análisis de fondo con perspectiva de infancia y en aplicación de los principios pro persona y del interés superior de la niñez.

Justificación: Cuando en un juicio de amparo se reclama la vulneración al derecho a la educación de una niña, niño o adolescente, y la autoridad responsable niega la existencia del acto reclamado, el órgano jurisdiccional debe realizar un análisis de fondo sobre su existencia, considerando que están en juego derechos fundamentales reforzados por una protección especial. Este análisis debe realizarse bajo una interpretación conforme a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos (artículo 1o. constitucional), aplicando el principio pro persona y, especialmente, el principio del interés superior de la niñez (artículos 4o. constitucional y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño). No basta con aceptar sin más la postura de la autoridad, sino que debe verificarse con una perspectiva garantista si efectivamente se han satisfecho las condiciones mínimas para el acceso efectivo a la educación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 1424/2024. 19 de junio de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretario: David Pallares Higuera.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031637

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.3o.C.117 C (11a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Común, Civil	

EMPLAZAMIENTO A UNA CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR. CUANDO NO SE EXHIBE LA TRADUCCIÓN DE LA CARTA ROGATORIA PARA SU PRÁCTICA, DEBE CONCEDERSE EL AMPARO AL TERCERO EXTRAÑO POR EQUIPARACIÓN PARA QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO (LEGISLACIÓN APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Hechos: En una controversia del orden familiar iniciada en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se dictó la sentencia de divorcio en la que se fijó una pensión alimenticia a favor de una persona menor de edad y se declaró la patria potestad compartida. Posteriormente la madre se trasladó a la Ciudad de México para continuar el procedimiento con el fin de que la guarda y custodia quedara exclusivamente a su favor. Procedimiento que una vez iniciado en esta localidad, el progenitor se enteró que existía un juicio en su contra, del cual se ostenta como tercero extraño por equiparación, razón por la cual promovió amparo indirecto en donde el Juzgado de Distrito determinó sobreseerlo en cuanto al acto reclamado al actuario adscrito al juzgado de origen y conceder la protección constitucional al estimar que no fue debidamente emplazado a juicio ante la falta de traducción de la carta rogatoria.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando en una controversia del orden familiar no se exhibe la traducción de la carta rogatoria para la práctica del emplazamiento, debe concederse el amparo al tercero extraño por equiparación para el efecto de que se reponga el procedimiento.

Justificación: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los Jueces deben privilegiar el fondo sobre la forma, pero cuando se trata de una de las formalidades esenciales, como lo es el emplazamiento, éste debe cumplirse cabalmente, al tratarse de la mayor entidad procesal, calificada así por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, cuando en un asunto se tramita una carta rogatoria en un idioma diverso al español, se estima necesaria su traducción conforme a los artículos 56, fracción II y 108, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, porque ese requisito formal lleva a una cuestión que involucra un derecho sustantivo, que es fundamental en atención al derecho de audiencia. En ese orden de ideas, la tramitación de un juicio con un emplazamiento defectuoso no constituye un mero formalismo que pueda obviarse, en interpretación del artículo 17, párrafo tercero, constitucional, lo que lleva a concluir que el fondo no es absoluto, porque está condicionado a que no se vea afectada la igualdad entre las partes, conforme al principio de seguridad jurídica. El hecho de que el juzgador ordene reponer el procedimiento para que se emplace adecuadamente al demandado no afecta el interés superior de la persona menor de edad en un juicio de alimentos, ya que es necesario que su progenitor sea emplazado correctamente al juicio de origen, para hacer valer sus derechos de manera adecuada y de las pruebas que oferte, al valorarlas, pueda determinarse adecuadamente qué es lo que más le conviene pues, de otra manera, ante la falta de certeza jurídica, generaría un mayor perjuicio en sus derechos alimentarios, por lo que resulta necesario que se integre la litis del juicio natural para una adecuada defensa del enjuiciado.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 8/2023. 15 de marzo de 2023. Mayoría de votos. Disidente: Cecilia Armengol Alonso. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: José Francisco Díaz Estúa Avelino.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031638

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** VIII.1o.P.A.14 A (11a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Administrativa, Constitucional	

IMPUESTO CEDULAR POR OTORGAR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES. EL ARTÍCULO 44 OCTIES DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE DURANGO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

Hechos: Una persona promovió amparo indirecto contra los artículos 44 Octies a 44 Octies 4 de la Ley de Hacienda del Estado de Durango. Argumentó que violan el principio de equidad tributaria al establecer un trato injustificado entre personas físicas, pues tiene como sujetos pasivos únicamente a las que obtengan un ingreso por el otorgamiento del uso o goce de bienes inmuebles mayor a la cantidad de $ 15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.). El Juzgado de Distrito estimó, respecto del artículo 44 Octies, que si bien esa exención podría causar una desigualdad de trato, no se actualiza una violación al principio referido, porque está sujeta a que no rebase el monto mínimo durante el mes, sin liberar de la obligación tributaria, pues la persona contribuyente deberá presentar en forma mensual sus declaraciones aun cuando no exista impuesto a cargo u obtenga saldo a favor, con lo que da un tratamiento igual a los desiguales, sin ser arbitrario ni caprichoso, con lo que se justifica la diferencia de trato, pues se dirige a todos los sujetos de la contribución.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 44 Octies de la Ley de Hacienda del Estado de Durango viola el principio de equidad tributaria.

Justificación: El tercer párrafo del referido artículo 44 Octies prevé que no pagarán dicho impuesto las personas contribuyentes cuyos ingresos mensuales no rebasen la cantidad de $ 15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.). Ahora bien, del análisis de los artículos 44 Octies a 44 Octies 4 mencionados se advierte que quienes se excedan del monto señalado deberán pagar el impuesto sobre la cantidad total que perciban y no sobre el excedente, de lo que se deduce que existe un trato diferenciado para las personas contribuyentes que se dediquen al arrendamiento o subarrendamiento y, en general, por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles.

La diferencia de ingresos obtenida por los sujetos pasivos del impuesto no constituye una circunstancia que justifique darles un tratamiento fiscal distinto, toda vez que se trata de un aspecto ajeno al hecho imponible del tributo. Ello, porque conforme al indicado artículo 44 Octies el objeto del impuesto va dirigido a los actos o actividades consistentes en el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes inmuebles. No existe razón objetiva para justificar un tratamiento diferenciado entre las personas contribuyentes del impuesto dependiendo del monto de los ingresos que obtengan en el mes sobre ese mismo concepto (arrendamiento o subarrendamiento y, en general, por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles).

Máxime que el legislador no justificó el trato diferenciado del porqué la persona que reciba un ingreso menor a la cantidad referida no deberá pagar el impuesto cedular, y la que la exceda sí deberá hacerlo, no obstante que se trata de la misma actividad (uso temporal de bienes inmuebles) y dirigido al mismo tipo de personas (físicas).

La protección constitucional debe concederse por extensión respecto de los aludidos artículos 44 Octies 1 a 44 Octies 4, pues regulan las deducciones, pagos y declaraciones provisionales y las obligaciones de presentar avisos y declaraciones de las personas contribuyentes, por tener una relación directa entre sí casi indisociable con el impuesto reclamado y constituir un sistema normativo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO.

Amparo en revisión 25/2024. 21 de agosto de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Álvarez Bibiano. Secretario: Arturo Sergio Puente Maycotte.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031639

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Jurisprudencia	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** II.2o.C. J/1 K (12a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Común	

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA EN PROCESOS JURISDICCIONALES. CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA VÁLIDA PARA CALCULAR EL MONTO DE LAS GARANTÍAS QUE SE FIJEN EN LOS JUICIOS DE AMPARO.

Hechos: Diversas personas interpusieron recursos de queja y de revisión en el incidente de suspensión para impugnar el monto de las garantías fijadas por Juzgados de Distrito al acordar diferentes asuntos. Consideraron que su determinación carecía de parámetros objetivos o que no se tomaron en cuenta las características personales y capacidad económica de la persona quejosa para fijarlas.

Criterio jurídico: Las herramientas de inteligencia artificial pueden emplearse válidamente en procesos jurisdiccionales para calcular el monto de las garantías que se fijen en los juicios de amparo, en el entendido de que su utilización no sustituye la labor de las personas juzgadoras, sino que facilitan y eficientizan la administración de justicia.

Justificación: Ante el avance de las nuevas tecnologías y las tendencias emergentes de justicia digital, la inteligencia artificial es una herramienta innovadora que puede incorporarse a los procesos para facilitar el razonamiento numérico dentro de labores jurisdiccionales.

La jurisprudencia exige parámetros para calcular las garantías que deben fijarse en los juicios de amparo, lo que exige operaciones como la actualización de valores, la aplicación de tasas de interés y la ponderación de lapsos procesales. Estas actividades, aunque necesarias para la motivación de una resolución judicial, no forman parte del núcleo decisorio jurisdiccional, sino que constituyen labores auxiliares susceptibles de apoyo tecnológico.

El uso de herramientas de inteligencia artificial en estos casos se justifica porque permite: a) reducir errores humanos en dichos cálculos; b) dar transparencia y trazabilidad al exponer cómo se obtiene el resultado paso a paso; c) generar consistencia y estandarización en los precedentes y en la fijación de los montos de las garantías; y d) mejorar la eficiencia procesal, al liberar tiempo para el análisis sustantivo del caso y facilitar la motivación de las decisiones judiciales.

Este mecanismo, recomendable desde una visión institucional de los tribunales que adoptan mejores prácticas para la administración de justicia, permite a las personas juzgadoras obtener datos auditables que muestran de manera transparente cómo se cuantifica una garantía. De esta forma se preserva el núcleo esencial de la función jurisdiccional, a la vez que se refuerza la motivación y transparencia del fallo, en consonancia con un principio de justicia digital y los estándares de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Queja 212/2025. 29 de julio de 2025. Unanimidad de votos de los Magistrados José Antonio Rodríguez Rodríguez, Juan Carlos Ortega Castro y Juan Jaime González Varas. Ponente: Juan Jaime González Varas. Secretario: Juan Carlos Guerra Álvarez.

Queja 404/2025. 24 de octubre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Juan Carlos Ortega Castro y Rosalba Azucena Gil Mejía, y de José del Carmen Gutiérrez Meneses, secretario en funciones de Magistrado. Ponente: José del Carmen Gutiérrez Meneses. Secretaria: Rocío Castillo García.

Incidente de suspensión (revisión) 359/2025. 6 de noviembre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Juan Carlos Ortega Castro y Rosalba Azucena Gil Mejía, y de José del Carmen Gutiérrez Meneses, secretario en funciones de Magistrado. Ponente: Rosalba Azucena Gil Mejía. Secretario: Víctor Daniel Monroy Torres.

Incidente de suspensión (revisión) 189/2025. 19 de noviembre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Juan Carlos Ortega Castro y Rosalba Azucena Gil Mejía, y de José del Carmen Gutiérrez Meneses, secretario en funciones de Magistrado. Ponente: Juan Carlos Ortega Castro. Secretaria: Débora Rico Colín.

Incidente de suspensión (revisión) 253/2025. 19 de noviembre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Juan Carlos Ortega Castro y Rosalba Azucena Gil Mejía, y de José del Carmen Gutiérrez Meneses, secretario en funciones de Magistrado. Ponente: Juan Carlos Ortega Castro. Secretaria: Débora Rico Colín.

Esta tesis se publicó el viernes 9 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de enero de 2026, para los efectos previstos en el punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031640

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Jurisprudencia	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** II.2o.C. J/2 K (12a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Común	

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA EN PROCESOS JURISDICCIONALES. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA SU USO ÉTICO Y RESPONSABLE CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS.

Hechos: En diversos recursos de queja y de revisión en incidentes de suspensión interpuestos contra decisiones de Juzgados de Distrito en amparo indirecto, este Tribunal Colegiado de Circuito empleó herramientas de inteligencia artificial para calcular el monto de una garantía. Al tratarse de una práctica innovadora en procesos jurisdiccionales resultó necesario, bajo un ejercicio de autocontención, definir los parámetros para la aplicación ética y responsable de la inteligencia artificial.

Criterio jurídico: La utilización de herramientas de inteligencia artificial en procesos jurisdiccionales con una perspectiva de derechos humanos, ética y responsable, exige que las personas juzgadoras observen como elementos mínimos los principios de: a) proporcionalidad e inocuidad; b) protección de datos personales; c) transparencia y explicabilidad; y d) supervisión y decisión humanas.

Justificación: Ante la ausencia de regulación específica para el uso de herramientas de inteligencia artificial las personas juzgadoras deben hacer un ejercicio de autocontención adoptando lineamientos para su aplicación responsable con perspectiva de derechos humanos.

Para ello pueden tomar como referencia los esfuerzos de regulación a nivel internacional, como las Directrices Éticas para una Inteligencia Artificial Fiable del Grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial creado por la Comisión Europea; el Reglamento del Parlamento Europeo del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial; y la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO y sus principios éticos.

Dichas referencias permiten adoptar mejores prácticas para la administración de justicia al introducir innovación tecnológica para una gobernanza administrativa judicial, preservando el núcleo de la función jurisdiccional sin afectar los derechos procesales de las partes.

Para ello, cuando utilicen herramientas de inteligencia artificial las personas juzgadoras deben cumplir con los siguientes elementos mínimos: a) la proporcionalidad e inocuidad exige que las herramientas de inteligencia artificial se utilicen únicamente en la medida necesaria y adecuada para alcanzar un fin legítimo, como por ejemplo, facilitar razonamientos numéricos sin que se alcance al razonamiento jurídico en la interpretación o aplicación de las normas; b) deben emplearlas de manera que no se comprometa la protección de datos del expediente judicial; c) la transparencia y explicabilidad imponen que la persona juzgadora no sólo informe que utiliza herramientas de inteligencia artificial, sino que exponga la metodología, los datos empleados y la forma en que se arribó al resultado, a fin de permitir que el procedimiento sea

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

auditado y comprendido por las partes y órganos revisores; y d) la supervisión y la decisión humanas aseguran que la tecnología opere como auxiliar y no como sustituto, manteniendo la deliberación y decisión en el ámbito estrictamente jurisdiccional.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Queja 212/2025. 29 de julio de 2025. Unanimidad de votos de los Magistrados José Antonio Rodríguez Rodríguez, Juan Carlos Ortega Castro y Juan Jaime González Varas. Ponente: Juan Jaime González Varas. Secretario: Juan Carlos Guerra Álvarez.

Queja 404/2025. 24 de octubre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Juan Carlos Ortega Castro y Rosalba Azucena Gil Mejía, y de José del Carmen Gutiérrez Meneses, secretario en funciones de Magistrado. Ponente: José del Carmen Gutiérrez Meneses. Secretaria: Rocío Castillo García.

Incidente de suspensión (revisión) 359/2025. 6 de noviembre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Juan Carlos Ortega Castro y Rosalba Azucena Gil Mejía, y de José del Carmen Gutiérrez Meneses, secretario en funciones de Magistrado. Ponente: Rosalba Azucena Gil Mejía. Secretario: Víctor Daniel Monroy Torres.

Incidente de suspensión (revisión) 189/2025. 19 de noviembre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Juan Carlos Ortega Castro y Rosalba Azucena Gil Mejía, y de José del Carmen Gutiérrez Meneses, secretario en funciones de Magistrado. Ponente: Juan Carlos Ortega Castro. Secretaria: Débora Rico Colín.

Incidente de suspensión (revisión) 253/2025. 19 de noviembre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Juan Carlos Ortega Castro y Rosalba Azucena Gil Mejía, y de José del Carmen Gutiérrez Meneses, secretario en funciones de Magistrado. Ponente: Juan Carlos Ortega Castro. Secretaria: Débora Rico Colín.

Esta tesis se publicó el viernes 9 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de enero de 2026, para los efectos previstos en el punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031641

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.2o.P.11 P (11a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Penal, Común	

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL REGISTRO DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. NO ES MATERIA DE EXAMEN EN EL AUTO INICIAL.

Hechos: Una persona designada como abogado particular de la parte imputada compareció a la audiencia inicial para ejercer su representación jurídica. Durante la misma, el Juez de Control le preguntó si su cédula profesional estaba registrada ante la Primera Sala de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del Poder Judicial de la Ciudad de México. Al responder negativamente, la persona juzgadora la requirió y conminó a cumplir con ese requisito, advirtiéndole que de no hacerlo estaría impedida para participar en la continuación de la audiencia.

El profesional del derecho promovió amparo indirecto contra tales determinaciones y alegó contar con patente profesional válida y acreditada previo al inicio de dicha audiencia. El Juzgado de Distrito desechó de plano la demanda, advirtiendo su notoria improcedencia en términos del artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XII y 5o., fracción I, todos de la Ley de Amparo, derivado de que el promovente carece de legitimación, al no ocasionarle el acto reclamado un agravio personal y directo en su esfera jurídica.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el interés jurídico de un profesional del derecho, que promueve amparo contra actos vinculados con el ejercicio de su profesión, no constituye un tema que pueda resolverse en el auto inicial de trámite, pues debe analizarse si el acto reclamado afecta su esfera de derechos, lo que requiere un examen de fondo en términos de los artículos 5o., fracción I y 113, de la Ley de Amparo.

Justificación: Las determinaciones directamente vinculadas con la representación jurídica que ejercen los profesionales del derecho, en particular, las que les imponen registrarse en el sistema administrativo implementado por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México y aperciben que, de no hacerlo, se limitará el ejercicio del cargo previamente encomendado, constituyen decisiones judiciales que obstaculizan su actividad profesional en directa afectación del derecho humano al libre ejercicio profesional reconocido por el artículo 5o. constitucional, condicionado únicamente a contar con la patente respectiva, que no se trate de una actividad ilícita, y que no se afecten derechos de terceros ni de la sociedad en general, tópicos no susceptibles de dilucidarse en el auto inicial del juicio de amparo y que acreditan el interés jurídico de la persona profesionista para promoverlo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 70/2025. 30 de abril de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Ariel Acevedo Cedillo. Secretario: Alejandro Rodríguez García.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031642

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** XV.1o.4 C (11a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Civil	

INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A UN JUICIO DE DESAHUCIO. LO TIENE EL ARRENDATARIO QUE DEMUESTRA ESA CALIDAD CON UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR AL ACTO RECLAMADO, AUNQUE SU CONCESIÓN SÓLO DEBE SER PARA EL EFECTO DE QUE SE LE RESPETE EL DERECHO DE POSESIÓN DEL INMUEBLE ARRENDADO.

Hechos: En amparo indirecto la parte quejosa reclamó todo lo actuado en un juicio de desahucio en el que no figura como parte demandada, alegando actos de desposesión del inmueble en litigio. El Juzgado de Distrito consideró que no demostró su interés jurídico y sobreseyó el juicio, pues a pesar de que demostró su calidad de arrendataria con un contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior al acto reclamado, no acreditó contar con la posesión material del inmueble objeto de la litis natural.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que tiene interés jurídico para promover amparo indirecto como tercero extraño a un juicio de desahucio el arrendatario que demuestra esa calidad con un contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior al acto reclamado, aunque su concesión sólo debe ser para el efecto de que se le respete el derecho de posesión del inmueble arrendado y no para que se le integre en la relación jurídico procesal.

Justificación: El juicio sumario de desahucio es un procedimiento ejecutivo especial que implica el conocimiento sumario del conflicto, limitado a decidir sobre la procedencia del desalojo, tomando en cuenta la oposición y prueba de las excepciones señaladas por las legislaciones civiles que lo contienen, el cual tiene sus particulares características que hacen que la litis se entable exclusivamente entre quien dice ser el arrendador y el que se señala como arrendatario. En ese estado de cosas, en atención a las particularidades especiales del juicio de desahucio no es dable para la persona quejosa acudir a defender sus intereses mediante el apersonamiento al juicio de origen, porque en éste no puede determinarse si el contrato fundatorio de la acción o el presentado al juicio de amparo es el válido y, por ende, a quién corresponde la posesión del bien. Partiendo de lo anterior, los efectos de la protección constitucional deben ser para que la autoridad responsable prescinda de afectar el derecho de posesión que ostenta la persona quejosa, lo que no implica que ésta sea llamada al juicio de origen, puesto que no tiene la calidad de parte en el mismo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 255/2024. 29 de agosto de 2025. Mayoría de votos. Disidente: Andrés Ureña Velarde, secretario de tribunal en funciones de Magistrado. Ponente: Juan Manuel García Arreguín. Secretario: Fausto Armando López Delgado.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031643

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.2o.T.49 L (11a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Laboral	

INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA POR INASISTENCIAS DE UNA PERSONA RECLUIDA EN UNA INSTITUCIÓN QUE COMBATE LAS ADICCIONES. PARA SU VALIDEZ AQUÉLLA DEBE SER OPORTUNAMENTE CITADA Y CONTAR CON LA POSIBILIDAD DE MANIFESTARSE SOBRE LAS FALTAS QUE SE LE ATRIBUYEN (CLÁUSULAS 55 Y 55 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL).

Hechos: En un juicio laboral, la parte actora demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social su reinstalación por considerar que fue despedida injustificadamente, así como diversas prestaciones laborales. La parte demandada negó la existencia de un despido injustificado y afirmó que rescindió la relación de trabajo de manera justificada porque la parte trabajadora incurrió en más de tres faltas de asistencia en un mes, por lo que se siguió el procedimiento de investigación previsto en las cláusulas 55 y 55 Bis del contrato colectivo de trabajo, sin que la parte actora justificara sus inasistencias. El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales que conoció de la controversia absolvió de la reinstalación reclamada. Concluyó que se demostró que: 1) se siguió el procedimiento de investigación previsto en las cláusulas citadas; 2) se acreditaron las inasistencias atribuidas; y 3) la trabajadora no informó oportunamente a la parte patronal el motivo que justificara sus faltas.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que para la validez de la investigación administrativa por inasistencias de las personas trabajadoras del Instituto Mexicano del Seguro Social, éstas deben ser oportunamente citadas y contar con la posibilidad de manifestarse sobre las faltas que se les atribuyen.

Justificación: La referida cláusula 55 del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social dispone que ninguna rescisión de contrato que no haya sido precedida de investigación, en los términos de las cláusulas aplicables de ese contrato colectivo, tendrá validez. Por su parte, la cláusula 55 Bis establece las formalidades que debe tener la investigación, entre otras: a) citar a la parte trabajadora para rendir su declaración con 36 horas de anticipación, sin considerar sábados, domingos y días de descanso obligatorio, y b) realizarse dentro de la jornada laboral. Además, como el pacto colectivo es de interpretación estricta, no prevé supuesto alguno para prescindir de la citación a la parte trabajadora al procedimiento administrativo para la rescisión del contrato. En esa medida, para que una investigación administrativa sea válida, invariablemente, debe contar con la citación de la parte trabajadora para que ésta tenga la oportunidad de manifestar lo que a su interés convenga en relación con los hechos que se le atribuyen. Esto es aplicable a los supuestos en los que la persona que debe ser citada se encuentre internada en algún centro o institución de combate a la adicción a las drogas, pues en ese caso, la persona trabajadora no tiene un tratamiento que sea de naturaleza ambulatoria, lo que le imposibilita acudir a la investigación administrativa correspondiente, sin que esa imposibilidad le sea atribuible. Por lo anterior, si la investigación administrativa se lleva a cabo por faltas de asistencia y la persona trabajadora acredita que se encontraba internada en alguna institución, ya sea gubernamental o en alguna organización

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

no gubernamental que tenga como fin el tratamiento de las adicciones a las drogas, esa investigación carece de validez, pues no le permite participar en la investigación y la priva de aportar elementos que demuestren que esas faltas no fueron injustificadas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 679/2024. 15 de agosto de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Adriana Ortega Ortiz. Secretario: Ricardo Pedrero Ruiz.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031644

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.3o.C.475 C (10a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Civil	

JUICIO REIVINDICATORIO. LA PERSONA QUE MANIFIESTA TENER LA POSESIÓN EN CONCEPTO DE DUEÑO DE UN BIEN SIN JUSTO TÍTULO, CARECE DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA RECONVENIR LA NULIDAD DEL INSTRUMENTO NOTARIAL QUE CONTIENE EL CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL INMUEBLE EN CUESTIÓN.

Hechos: En un juicio ordinario civil se ejerció la acción reivindicatoria con apoyo en un instrumento notarial donde se hizo constar el contrato de compraventa para acreditar la propiedad del bien inmueble y que así se condenara al demandado a su desocupación, devolución y entrega, junto con sus frutos y accesiones, así como al pago de los daños y perjuicios causados por su ocupación sin derecho. El demandado reconvino solicitando la declaración judicial de nulidad de dicha escritura pública. En la sentencia de primera instancia se declaró como legítimo propietario al actor y se condenó al demandado a desocupar y entregar a la actora el inmueble, con sus frutos y accesiones. Asimismo, a la parte actora se le absolvió en la acción reconvencional. Contra esa resolución el demandado principal interpuso recurso de apelación, en el cual se confirmó dicho fallo. Inconforme, promovió amparo directo.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que carece de legitimación en la causa la persona que en un juicio reivindicatorio manifiesta tener la posesión en concepto de dueño de un bien sin justo título, cuando reconviene solicitando la nulidad del instrumento notarial que contiene el contrato de compraventa del inmueble en cuestión.

Justificación: Conforme al Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la nulidad se puede pedir "por todo tercero", entendiendo por esto, todo aquel que pueda resultar afectado con el acto de que se trate o bien aquel que resulte beneficiado con la nulidad del mismo, lo que supone que no "todo interesado", de manera general, tiene legitimación para pedir la nulidad de un acto, sino sólo quien tenga un interés directo con ello, pues la acción de tutela del orden público general no existe, toda vez que se requiere de una afectación o beneficio particular para obtener la tutela del orden jurídico. Es decir, la aludida tutela no es genérica. Por tanto, cuando en la reconvención el actor reconvencionista pretende la declaración de nulidad del instrumento notarial que contiene un acto jurídico de compraventa de un inmueble, bajo el argumento de que detenta la posesión en concepto de dueño, sin que aporte un justo título en su calidad de propietario, dicha circunstancia no le concede legitimación en la causa.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 520/2019. Jorge Yamamoto Tsuzuki. 15 de noviembre de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: José Francisco Díaz Estúa Avelino.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031645

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Jurisprudencia	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** PR.P.T.CS. J/1 L (12a.)
Instancia: Plenos Regionales	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Laboral	

PERSONAL SINDICALIZADO DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX). TIENE DERECHO A OPTAR ENTRE EL RÉGIMEN DE JUBILACIONES O EL DE RETIRO POR CUENTAS INDIVIDUALES, INDEPENDIENTEMENTE DE SI ES DE PLANTA O TRANSITORIO (ARTÍCULO 2 DEL ANEXO 16 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO).

Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si las personas trabajadoras transitorias de Petróleos Mexicanos (Pemex), con una antigüedad inferior a 15 años al 31 de diciembre de 2015, que obtuvieron la planta con posterioridad a esa data, tienen derecho a optar entre el esquema de jubilación o el de retiro por cuentas individuales, conforme al artículo referido. Mientras que uno concluyó que esa prerrogativa sólo beneficia a las personas trabajadoras de planta al 31 de diciembre de 2015, al ser las únicas con derecho a jubilación; el otro sostuvo que era aplicable tanto al personal de planta como al transitorio, pues la norma se dirige a las personas trabajadoras sindicalizadas, concepto que comprende ambas categorías.

Criterio jurídico: El derecho a permanecer en el régimen de jubilación o a optar voluntariamente por incorporarse al esquema de cuentas individuales, conforme a las reglas del artículo 2 del Anexo 16, Reglamento de Jubilaciones y Retiro, del Contrato Colectivo de Trabajo de Pemex y sus Empresas Productivas Subsidiarias, corresponde a todas las personas trabajadoras sindicalizadas que al 31 de diciembre de 2015 hayan registrado una antigüedad menor a 15 años, sin distinguir entre personal de planta o transitorio.

Justificación: Del artículo mencionado se advierte que está dirigido a las personas trabajadoras sindicalizadas, categoría que conforme a las cláusulas 1, fracción IV, y 35 del pacto colectivo, comprende tanto al personal de planta como al transitorio.

Asumir que sólo el personal de planta puede ejercer el derecho a elegir entre el régimen de jubilación o retiro, por ser el único reconocido por el contrato colectivo de trabajo aludido para acceder a la jubilación –sin prejuzgar sobre la validez de este hecho– confunde el derecho a la jubilación con el derecho a elegir el régimen aplicable en el futuro y contradice el sentido literal del artículo 2 citado, el cual, bajo la locución "trabajadores sindicalizados" comprende ambas categorías conforme a las definiciones del propio pacto colectivo.

Esta interpretación se refuerza porque dicho pacto admite que el personal transitorio eventualmente satisfaga los requisitos para acceder a la jubilación, como se desprende de la cláusula 1, fracción XXI, y del artículo 2 del Anexo 2, Reglamento de Escalafones y Ascensos, normas que reconocen los años de servicio prestados en ambas categorías para computar la antigüedad de empresa, requisito necesario para obtener la jubilación.

En consecuencia, cuando se actualiza el supuesto en la norma contractual analizada, tanto las personas trabajadoras de planta como las transitorias pueden optar por permanecer en el régimen de jubilaciones, regulado por el capítulo I del Reglamento de Jubilaciones y Retiro, o incorporarse voluntariamente al esquema de cuentas individuales previsto en su

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

capítulo II, reglas que deberán aplicarse para otorgar el beneficio que les corresponda cuando reúnan los requisitos de edad y años de servicio.

PLENO REGIONAL EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Contradicción de criterios 91/2025. Entre los sustentados por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito. 22 de octubre de 2025. Tres votos de las personas Magistradas Antonio Salazar López, Vanessa Heidi Nambo Huerta y Rodolfo Alejandro Ramos Santillán. Ponente: Antonio Salazar López. Secretario: Eduardo Alfonso Guerrero Serrano.

Tesis y/o criterios contendientes:

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, al resolver el amparo directo 470/2023, el cual dio origen a la tesis aislada X.3o.T.2 L (11a.), de rubro: "RÉGIMEN PENSIONARIO DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS SINDICALIZADAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX). SE DIRIGE A TODAS, SIN DISTINCIÓN RESPECTO DEL TIPO DE CONTRATACIÓN (DE PLANTA O TRANSITORIA).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 17 de mayo de 2024 a las 10:22 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 37, Tomo V, mayo de 2024, página 5199, con número de registro digital: 2028801, y

El sustentado por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo 581/2023.

Esta tesis se publicó el viernes 9 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 12 de enero de 2026, para los efectos previstos en el punto octavo del Acuerdo General Plenario 7/2025 (12a.).

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031646

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.6o.P.7 P (11a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Penal	

PROCEDIMIENTO ABREVIADO. EL JUEZ DE CONTROL DEBE CERCIORARSE QUE EL ACUSADO COMPRENDA DE MANERA DIRECTA, CLARA Y DETALLADA LOS EFECTOS JURÍDICOS DE ESTA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, RENUNCIE EXPRESAMENTE AL JUICIO ORAL Y ACEPTE DE MANERA INFORMADA LA PENA PROPUESTA POR EL MINISTERIO PÚBLICO.

Hechos: En amparo directo el quejoso alegó que el Juez de Control no verificó de manera directa y suficiente que hubiera comprendido los alcances, efectos y consecuencias jurídicas del procedimiento abreviado, ni que hubiera manifestado su consentimiento de manera informada.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el Juez de Control, al autorizar el procedimiento abreviado debe asegurarse de forma directa y en audiencia que el imputado comprende íntegramente los alcances jurídicos del procedimiento, sus efectos y consecuencias, y lo acepta de forma libre, voluntaria e informada.

Justificación: Conforme a los artículos 20, apartado A, fracción VII, de la Constitución General y 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento abreviado exige como presupuesto esencial la verificación judicial del consentimiento informado del acusado. Esta obligación impone a la persona juzgadora un rol activo de garantía del debido proceso, que no se satisface con una simple ratificación formal ni con la manifestación de la defensa. El juzgador debe cerciorarse de manera directa y detallada que el acusado comprende los alcances, efectos y consecuencias jurídicas de acogerse a dicho procedimiento, incluida la renuncia al juicio oral y la aceptación de la pena, en el entendido de que si la sanción excede del quantum para otorgar algún sustitutivo o suspensión condicional de la pena de prisión, ello también deberá ser debidamente precisado, para garantizar que dicha decisión sea libre, voluntaria e informada. Ello, porque sólo a través de esa constatación es posible avalar que la aceptación no deriva de un desconocimiento, coacción o simulación procesal.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 45/2025. 3 de julio de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Isabel Cristina Porras Odriozola. Secretaria: Almendra Luminita Velázquez Tolentino.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031647

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.20o.A.107 A (11a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Administrativa, Común	

PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL REQUISITO DE QUE LOS MÉDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS CUENTEN CON LA ESPECIALIDAD O CERTIFICACIÓN EN ETOLOGÍA PARA DIAGNOSTICAR LA APLICACIÓN DE LA EUTANASIA EN LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY RELATIVA, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD.

Hechos: Una persona médico veterinario zootecnista promovió amparo indirecto contra el artículo citado. Alegó que el requisito de contar con especialización o certificación en etología para diagnosticar la aplicación de la eutanasia en animales no destinados al consumo humano con problemas conductuales viola su derecho a la libertad de trabajo. Solicitó que para advertir esa violación se desplegara el test de proporcionalidad. El Juzgado de Distrito sobreseyó el juicio. Contra esa decisión se interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el requisito previsto en el artículo 51 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México, consistente en que los médicos veterinarios zootecnistas cuenten con la especialidad en materia de etología para diagnosticar la aplicación de la eutanasia en animales no destinados al consumo humano con problemas conductuales incompatibles con una buena calidad de vida o que sean un peligro para ellos o para otros, supera el test de proporcionalidad.

Justificación: Dicha exigencia es una medida distintiva que persigue una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, ya que los animales han sido reconocidos como seres sintientes cuyo bienestar físico y mental debe ser procurado en su vida y muerte, de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México y los tratados internacionales de los que México es Parte. Ello puede lograrse en el caso específico tomando en cuenta que el objeto de estudio de esa área de la biología está destinado al comportamiento animal de manera particular. Además, es una medida racional y adecuada porque a través del conocimiento adquirido con esa especialidad se brinda seguridad respecto de la aplicación de la eutanasia en animales que presenten problemas conductuales que sean incompatibles con una buena calidad de vida o que constituyan un peligro para ellos o para otros. También es proporcional porque no torna ineficaz o nula la posibilidad de aplicar dicho procedimiento en los demás supuestos previstos, y permite su ampliación en problemas conductuales, siempre que obtenga el diagnóstico correspondiente, o bien, obtenga tal especialización para poder hacerlo. Sin que se advierta una medida menos lesiva para lograr el propósito constitucional. De ahí que se encuentre justificado el trato diferenciado para realizar los diagnósticos a que se refiere el mencionado artículo 51.

VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 9/2025. María Elena Esparza Alvarado. 28 de agosto de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Mayra González Solís. Secretaria: María Guadalupe Montoya Aldaco.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031648

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.20o.A.108 A (11a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Administrativa	

PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY RELATIVA ES DE NATURALEZA AUTOAPLICATIVA.

Hechos: Una persona médico veterinario zootecnista promovió amparo indirecto contra el artículo citado, que prevé el requisito de contar con especialización o certificación en etología para diagnosticar la aplicación de la eutanasia en animales no destinados al consumo humano con problemas conductuales, en su carácter de norma autoaplicativa. Las autoridades responsables estimaron que la disposición señalada es de naturaleza heteroaplicativa. El Juzgado de Distrito sobreseyó el juicio. Contra esa decisión se interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el artículo 51 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México es de naturaleza autoaplicativa.

Justificación: El artículo indicado establece una permisión dirigida, en primer lugar, a las personas médico veterinario zootecnistas, sin especialidad en etología, consistente en determinar que un animal no destinado al consumo humano sufrió una lesión grave que sea incompatible con la vida o que tiene una enfermedad que le causa dolor y sufrimiento que no puede ser aliviado y como consecuencia de tal hecho, aplicarle la eutanasia y, en segundo lugar, en el caso de animales con problemas conductuales incompatibles con una buena calidad de vida o que constituyan un peligro para ellos o para otros, establece una permisión condicionada a obtener un diagnóstico previo en el sentido de que se actualiza alguno de esos supuestos, determinado por un médico veterinario zootecnista con especialidad en dicha materia. En ese contexto, desde su entrada en vigor causa perjuicio a los médicos veterinarios zootecnistas sin especialidad en etología, al excluirlos de la posibilidad de determinar si un animal no destinado al consumo humano presenta problemas conductuales, para efectos de la aplicación de la eutanasia. Por tanto, al acudir al juicio de amparo a reclamar la constitucionalidad de ese requisito de especialización, para efectos de su procedencia, la persona quejosa sólo debe probar que está en la hipótesis que lo excluye, esto es, que es un médico veterinario zootecnista.

VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 9/2025. María Elena Esparza Alvarado. 28 de agosto de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Mayra González Solís. Secretaria: María Guadalupe Montoya Aldaco.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031649

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.3o.C.112 C (11a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Civil	

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE SOLICITA A TRAVÉS DE UNA VÍA AUTÓNOMA POR QUIEN NO FUE PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN (ARTÍCULO 529 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO).

Hechos: En la vía ordinaria civil se ejerció la acción prescriptiva para que el adjudicatario de un diverso juicio hipotecario tomara posesión del inmueble que le fue adjudicado. La demanda no fue admitida, al considerarse que las pretensiones del actor debían tramitarse ante el juzgado que resolvió el mencionado juicio, del que se solicitó la prescripción de su ejecución.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que es improcedente la acción a la que se refiere el artículo 529 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, que trata de la prescripción de la ejecución de una sentencia, cuando se ejerce a través de una vía autónoma por quien no fue parte en el juicio de origen.

Justificación: Del artículo referido deriva que la acción para pedir la ejecución de una sentencia, transacción o convenio judiciales, durará diez años contados desde el día en que se venció el término judicial para el cumplimiento voluntario de lo juzgado y sentenciado. En ese orden de ideas, el inicio del tiempo necesario para la prescripción debe partir del momento en que el ejecutante puede materialmente iniciar el procedimiento de ejecución, pues ello permite estar en condiciones de determinar que el derecho depende exclusivamente del beneficiado con la sentencia para hacerlo valer ante la autoridad jurisdiccional, y no de factores que escapan a su voluntad. Así, la acción que prevé el precepto citado sirve para ejecutar la sentencia, es decir, una actio iudicati, sin que sea procedente una acción independiente, porque ya existe la condición de un derecho mediante una sentencia definitiva, de tal suerte que si se pretende hacer valer la prescripción, ese derecho sólo está reservado a las partes del juicio cuya resolución se pretende ejecutar, sin que pueda ejercerse de manera autónoma por quien no fue parte en éste.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 560/2024. Guillermo Carbajal Ruiz. 15 de enero de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo López Rodríguez, secretario de tribunal autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: José Francisco Díaz Estúa Avelino.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031650

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.6o.C.1 CS (12a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Constitucional	

PRUEBA PERICIAL EN GENÉTICA O DE ÁCIDO DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) EN AMPARO INDIRECTO. PUEDE ORDENARSE, DE OFICIO, SU DESAHOGO, EN ATENCIÓN AL INTERÉS SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE EDAD, CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA DE SU REGISTRO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL REGISTRO CIVIL.

Hechos: En amparo indirecto se reclamó la negativa de autoridades del Registro Civil de la Ciudad de México de registrar a una menor de edad nacida mediante técnicas de reproducción asistida, porque para realizar la inscripción se requirió una sentencia ejecutoriada que ordenara el registro del nacimiento. El Juzgado de Distrito, de oficio, ordenó el desahogo de la prueba pericial en genética para conocer su origen biológico, en atención al interés superior del menor, y requirió a la parte quejosa para que designara perito en genética, así como la institución o laboratorio donde se realizaría el examen respectivo. Inconformes los quejosos interpusieron recurso de queja alegando exceso de formalismos y reclamando el respeto al derecho a la voluntad procreacional.

Criterio jurídico: El Juzgado de Distrito tiene la facultad de ordenar, de oficio, el desahogo de la prueba pericial en genética o de ácido desoxirribonucleico (ADN) en amparo indirecto, en atención al interés superior de la persona menor de edad, cuando se reclama la negativa de su registro por parte de las autoridades del Registro Civil.

Justificación: El principio del interés superior del menor está reconocido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece la obligación de todas las autoridades de velar por él y atenderlo, el cual debe ser observado en toda decisión judicial que involucre a niñas, niños y adolescentes. Dicho principio también se establece en el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por el Estado Mexicano, así como en los diversos 19, fracción III, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 18 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. Además, conforme a esa legislación, todo niño o niña, al nacer, tiene derecho a un nombre y a ser registrado, conocer a sus padres o su origen en la medida de lo posible, así como conocer y preservar su identidad, lo que se vincula con el parentesco, que es el vínculo jurídico que une a las personas, de donde surgen derechos y obligaciones. Por otro lado, las personas recién nacidas por técnicas de reproducción asistida, por la sola circunstancia de ser recién nacidas, se encuentran en un estado de suma vulnerabilidad. Así, cuando en un juicio de amparo los quejosos que se ostentan como progenitores de un menor nacido bajo dicha técnica reclaman la negativa de su registro atribuida a las autoridades del Registro Civil, el Juez de Distrito, conforme a los artículos 75 y 119 de la Ley de Amparo, así como 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, tiene la facultad para ordenar el desahogo de la prueba pericial en genética o de ADN (ácido desoxirribonucleico), si la estima necesaria para resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto o actos reclamados y sobre la veracidad de las manifestaciones de la parte quejosa, ya que se trata de una prueba idónea para que, conforme al interés

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

superior del menor, se conozca su origen biológico y pueda disiparse cualquier duda sobre las afirmaciones de parentesco o filiación manifestadas bajo protesta de decir verdad.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 212/2025. 16 de octubre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Ismael Hernández Flores, Carmen Patricia Chávez Acosta y Saúl Yáñez Sotelo. Ponente: Saúl Yáñez Sotelo. Secretario: Alejandro Bautista Mejía.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031651

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** XVII.1o.P.A.12 K (11a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Común	

RATIFICACIÓN DEL DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA DILIGENCIA RELATIVA REALIZADA POR VIDEOLLAMADA.

Hechos: En un juicio de amparo indirecto el quejoso presentó por escrito su intención de desistirse de la demanda. El Juzgado de Distrito requirió su ratificación, para lo cual autorizó su localización vía remota y la práctica de la diligencia correspondiente mediante videollamada. Durante la comunicación la actuaria judicial corroboró la identidad del quejoso mediante su credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE), y dio fe de la coincidencia de los rasgos fisonómicos del compareciente, quien ratificó de forma clara y consciente el contenido de su escrito.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la ratificación del desistimiento de la demanda de amparo, exigida por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, puede realizarse válidamente mediante videollamada, a través de aplicaciones electrónicas, siempre que: a) se dé una manifestación de voluntad expresa por parte del quejoso; b) se practique dentro del plazo legal previsto para ello; y c) se dé una autentificación personal de la identidad del promovente por una autoridad judicial facultada.

Justificación: El precepto citado establece como requisito para la validez del desistimiento que éste sea ratificado personalmente por la parte quejosa dentro del plazo legal. Esta exigencia tiene por objeto asegurar que la manifestación de voluntad sea auténtica, libre e informada. No obstante, la Ley de Amparo no condiciona dicha ratificación a una modalidad física o presencial específica, sino que exige la verificación directa y personal por parte de una autoridad judicial. En este sentido, el uso de tecnologías de comunicación como la videollamada resulta jurídicamente admisible, siempre que se garantice la identidad del promovente mediante elementos objetivos, como la exhibición de una identificación oficial y la confrontación de rasgos físicos.

Así, cuando la autoridad jurisdiccional adopta medidas idóneas y suficientes para asegurar la autenticidad del acto procesal de desistimiento, su ratificación por videollamada constituye un acto válido, eficaz y compatible con el orden jurídico, actualizando la causal de sobreseimiento prevista por el artículo 63 citado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 1692/2024. 19 de junio de 2025. Unanimidad de votos. Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretario: Pablo Chávez Gamboa.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031652

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** III.2o.C.48 C (11a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Civil	

RENUNCIA A LA PRESCRIPCIÓN GANADA O CONSUMADA. LOS ARTÍCULOS 1734 Y 1735 DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE JALISCO QUE LA REGULAN, NO VIOLAN LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA.

Hechos: En un juicio ordinario civil se ejerció la acción de pago de un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria. El demandado opuso la excepción de prescripción negativa, la cual fue desestimada por el Juez en la sentencia, pues consideró que el demandado renunció de manera tácita a la prescripción ganada respecto del crédito exigido, al haber confesado en su contestación que realizó pagos parciales un año después de que había operado la prescripción, condenándolo al pago de las prestaciones exigidas. Esta determinación fue confirmada en apelación.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el hecho de que la interpretación de los artículos 1734 y 1735 del Código Civil del Estado de Jalisco conlleve que la renuncia a la prescripción ganada o consumada no opere en forma automática de pleno derecho, sino que se requiera de una declaración judicial, es acorde con los derechos de audiencia y de defensa reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Justificación: Los preceptos legales citados establecen que las personas con capacidad para enajenar pueden renunciar a las prerrogativas que derivan de la prescripción ganada, y que tal renuncia puede ser expresa o tácita. Esto no significa que la prescripción o su renuncia operen de pleno derecho, pues al carecer de vida propia su existencia depende de la obligación relativa y requieren ser objeto de pronunciamiento judicial. En ese contexto, si el deudor considera que se han configurado los elementos de la prescripción negativa o liberatoria consistentes en la existencia de una obligación prescriptible, el incumplimiento del pasivo y la inacción del activo por el tiempo que determina la ley o, en su caso, que se estime actualizada una renuncia a la prescripción ganada o consumada, sea en forma expresa o tácita, es indispensable que promueva un juicio para obtener así la declaración judicial relativa. Ello, porque es precisamente a través de un juicio –donde ya sea en vía de acción o excepción, las partes pueden alegar o desvirtuar la prescripción negativa o su renuncia, formular los hechos de su demanda o defensa de su contestación, y ofrecer pruebas y contrapruebas e, incluso, objetarlas y formular agravios a fin de acreditar su derecho para que sea reconocido en sentencia– como se garantiza el respeto a los derechos de audiencia y de defensa reconocidos por los artículos 14 y 16 constitucionales, previo a declarar la prescripción o su renuncia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 430/2021. 13 de enero de 2023. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Flores Jiménez. Secretario: Alberto Carrillo Ruvalcaba.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031653

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.3o.C.474 C (10a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Común, Civil	

SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN AMPARO INDIRECTO. PARA SU CONCESIÓN, EL JUZGADOR DEBE FIJAR LA GARANTÍA, ATENDIENDO AL VALOR DEL BIEN MUEBLE EMBARGADO EN EL JUICIO DE CONTROVERSIA DE ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO.

Hechos: En un amparo indirecto, derivado de un juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario, se concedió la suspensión definitiva en la que se fijó discrecionalmente la garantía conforme al artículo 132 de la Ley de Amparo, por los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar al tercero interesado, con lo que no estuvo de acuerdo la peticionaria, al considerar que dicha garantía es aplicable solamente cuando aquéllos no sean cuantificables en dinero. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revisión.

Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que al fijarse la garantía para que surta efectos la suspensión definitiva en amparo indirecto, la persona juzgadora debe atender al valor del bien mueble embargado en un juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario.

Justificación: El citado artículo 132 establece que en los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. De esta manera, cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. No obstante, cuando existe cantidad líquida, como lo es el valor de un bien mueble embargado en un juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario, éste debe tomarse en cuenta para fijar la garantía.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Incidente de suspensión (revisión) 74/2020. Elizabeth Romero Sastre. 11 de marzo de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Gloria Santiago Rojano.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Registro: 2031654

Duodécima Época	**Tipo de Tesis:** Aislada	**Publicación:** Viernes 9 de enero de 2026 10:10 horas	**Tesis:** I.20o.A.10 A (12a.)
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito	**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación.	**Materia(s):** Común, Administrativa	

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. PROCEDE PARA EL EFECTO DE QUE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS (COMAR) EXPIDA UNA CONSTANCIA PROVISIONAL QUE CONTENGA LOS DATOS DEL TRÁMITE QUE LA PERSONA SOLICITANTE INICIÓ PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADA.

Hechos: Una persona extranjera promovió amparo indirecto contra la negativa de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) de reanudar su trámite de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada. El Juzgado de Distrito negó la suspensión provisional solicitada. Estimó que al existir una determinación que lo tuvo por no reanudado, es un acto declarativo que carece de ejecución material. Además, que otorgar la medida cautelar conduciría a dar efectos constitutivos y reconocer un derecho con el que no cuenta. En el recurso de queja interpuesto contra esa decisión, dicha persona argumentó que conceder la medida provisional le generaría una constancia de que inició dicho procedimiento y demostrar su legal estancia en el país.

Criterio jurídico: Procede la suspensión provisional para que la Comar expida una constancia que contenga los datos del trámite que la persona solicitante inició para el reconocimiento de la condición de refugiada, y la anotación de que excepcionalmente se encuentra en análisis la reanudación del trámite conforme al artículo 25 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria.

Justificación: El artículo 147 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para otorgar efectos restitutorios provisionales de tutela anticipada a la suspensión, ponderando la apariencia del buen derecho y el interés social, siempre que se conserve la materia del juicio. La naturaleza del acto reclamado implica el reconocimiento de la existencia del trámite respectivo, lo cual no agota la materia del juicio ni puede estimarse que es una resolución definitiva, porque el referido artículo 25 posibilita de manera excepcional su reanudación cuando se acredite que fue imposible darle continuidad por causas ajenas a la voluntad de la persona solicitante. Además, le permite demostrar su legal estancia en el país en tanto se resuelve su condición de refugiada, si el trámite está identificado y reconocido por la Comar. En ese contexto, si se otorga una constancia de trámite provisional respecto a su solicitud, no se constituirían derechos a su favor, sino que se le restituiría en el goce del derecho que estima violado.

Esa constancia es el documento idóneo para que la persona solicitante ejerza su derecho a la personalidad jurídica, en su dimensión instrumental, la cual debe contener los datos del trámite relativo y la anotación de que excepcionalmente se encuentra en análisis su reanudación. Ello le permitirá demostrar su legal estancia en el país y acceder a los servicios de salud, educación y trabajo, entre otros, mientras se resuelve su situación migratoria.

VIGÉSIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244

Queja 278/2025. Dalia Isabel Romero Fonseca. 21 de octubre de 2025. Unanimidad de votos de las personas Magistradas Fernando Silva García, Mayra González Solís y Daniela Tejeda Hernández. Ponente: Mayra González Solís. Secretaria: Virginia Zamudio Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2026 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

9513515677
www.gazhal.com.mx
PROLONGACION DE MINERIA No. 102, CASA 12
SANTA MARÍA IXCOTEL
OAXACA DE JUAREZ OAXACA.
CP.71244